

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El proyecto tiene por objeto unificar y centralizar en una sola norma los procedimientos mediante el que el personal de la Guardia Civil se comunica con los distintos órganos de la Dirección General de la Guardia Civil, diferenciando los siguientes supuestos:

a) Propuestas y sugerencias sobre el régimen de personal, sobre sus derechos y deberes, sobre el ejercicio del derecho de asociación, sobre los aspectos sociales que les afecten, y sobre la protección de la seguridad y la salud, en relación a lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre.

b) Quejas, en el ámbito de su unidad, centro u organismo, relativas al régimen de personal, a las condiciones y a la calidad de vida en las unidades, en relación a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre.

c) Solicitudes de información sobre asuntos de carácter individual, relacionados con aspectos jurídicos, administrativos, sociales o profesionales.

Se excluyen de lo dispuesto en el real decreto las solicitudes comprendidas dentro del Derecho de Petición regulado mediante Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.

I

En el momento actual, en lo que a la materia de protección de datos personales se refiere, la normativa a la que debe ajustarse el anteproyecto sometido a consulta es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

En atención al principio de licitud del tratamiento recogido en el artículo 5.1.a) del RGPD, debe partirse de lo señalado en nuestro Informe 175/2018, respecto de la legitimidad de los tratamientos de datos personales por las Administraciones Públicas:

Como CONCLUSIÓN en este punto, cabe decir que, con carácter general, la base jurídica del tratamiento en las relaciones con la Administración, en aquellos supuestos en que existe una relación en la que no puede razonablemente predicarse que exista una situación de equilibrio entre el responsable del tratamiento (la Administración), y el interesado (el administrado) no sería el consentimiento (art. 6.1.a) RGPD), sino, según los casos, el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) RGPD) o el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) RGPD).

En el presente caso, los tratamientos de datos personales derivan del ejercicio de los derechos reconocidos al personal de la Guardia Civil en los artículos 54.4 (derecho a plantear propuestas y sugerencias sobre el régimen de personal, sobre sus derechos y deberes, sobre el ejercicio del derecho de asociación y sobre los aspectos sociales que les afecten) y 33 (derecho a presentar, en el ámbito de su unidad, centro u organismo, quejas relativas al régimen de personal, a las condiciones y a la calidad de vida en las unidades, siempre que no hubiese presentado recurso sobre el mismo asunto) de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

Por consiguiente, el reconocimiento de los citados derechos por la Ley Orgánica 11/2007 implica la correspondiente obligación impuesta por dicha norma de tramitar los correspondientes procedimientos, por lo que el tratamiento de los datos personales se legitimaría, fundamentalmente, en la letra c) del artículo 6.1. del RGPD (el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento).

En cuanto a la solicitud de información sobre asuntos de carácter individual, relacionados con aspectos jurídicos, administrativos, sociales y profesionales, al no existir un derecho específico reconocido como tal en la citada Ley Orgánica que comprenda la correspondiente obligación legal, ni reconocerse tampoco con carácter general en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil (más allá del supuesto reconocido en el caso de paso a retiro en el artículo 94.4 de acceso a información sobre prestaciones a las que tienen derecho y otros asuntos que puedan ser de su interés) debe encuadrarse, con carácter general y al derivar de la relación de servicios profesionales, dentro de la letra b) del artículo 6.1. del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el

que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.

Por otro lado, deberá de cumplirse, igualmente, con el resto de principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, destacando el principio de minimización de datos al que posteriormente se hará referencia.

II

Partiendo de lo anterior, el texto remitido contiene un artículo específico dedicado a la protección de datos personales, cuya inclusión se valora positivamente por esta Agencia:

Artículo 7. Protección de datos.

1. El tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los documentos que contengan las propuestas, sugerencias, quejas o solicitudes de información se ajustará a lo dispuesto a la normativa de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
2. El personal que tenga acceso a los datos referidos en el apartado anterior estará sujeto al deber de confidencialidad en el tratamiento de los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y tiene el deber de guardar secreto profesional y el debido sigilo respecto a ellos, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre.

A este respecto, destaca la inclusión de la referencia expresa al deber de secreto establecido por la normativa específica. No obstante, en cuanto a la normativa aplicable a la que se refiere el primer apartado, teniendo en cuenta que se aplica directamente el RGPD, y para evitar confusiones que se vienen observando en otras normas, en las que las referencias se hacen solo a la LOPDGDD, se considera necesario que se citen ambas normas, **por lo que se propone la siguiente redacción del apartado 1:**

1. **El tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los documentos que contengan las propuestas, sugerencias, quejas o solicitudes de información se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en su normativa de desarrollo.**

Por otro lado, tal y como se adelantaba anteriormente, debe hacerse especial referencia al principio de minimización de datos recogido en el artículo 5.1. del RGPD en su letra c), en virtud del cual los datos personales serán *“adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”*.

En virtud de dicho principio, debería revisarse la información mínima que ha de incluir necesariamente la propuesta o sugerencia (artículo 9.2) o la queja (artículo 13.2.), especialmente en lo que se refiere al documento nacional de identidad.

A este respecto, conviene resaltar que el RGPD ha recogido la creciente preocupación sobre el tratamiento del número nacional de identificación, facultando a los Estados Miembros a regular las condiciones en las que se podrá proceder a dicho tratamiento y exigiendo la adopción de las garantías adecuadas que salvaguarden la aplicación del reglamento, tal y como resulta de su artículo 87:

Artículo 87 Tratamiento del número nacional de identificación.

Los Estados miembros podrán determinar adicionalmente las condiciones específicas para el tratamiento de un número nacional de identificación o cualquier otro medio de identificación de carácter general. En ese caso, el número nacional de identificación o cualquier otro medio de identificación de carácter general se utilizará únicamente con las garantías adecuadas para los derechos y las libertades del interesado con arreglo al presente Reglamento.

Precisamente, con la finalidad de introducir las necesarias garantías en el tratamiento del DNI por parte de las Administraciones Públicas, la LOPDGDD ha introducido una regulación específica al respecto en su disposición adicional séptima que, si bien referida al supuesto específico de notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos, introduce garantías en el tratamiento del DNI de los interesados, partiendo de la base de la injerencia que puede suponer en el derecho fundamental a la protección de datos personales que se conozcan conjuntamente el nombre y apellidos y el DNI de una persona, además del importante riesgo de usurpación de identidad que puede producirse.

Por otro lado, siendo los solicitantes miembros de la Guardia Civil, hay que tener en cuenta la existencia de un identificador específico de los mismos, la tarjeta de identificación militar, regulada en la Orden DEF/600/2002, de 7 de marzo, por la que se regula la tarjeta de identidad militar para el personal de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia Civil y militares de nacionalidad no española destinados en los Cuarteles Generales Internacionales ubicados en España, que aun basándose en el número del documento nacional de identidad, no se corresponden exactamente con el mismo, y que acredita,

además, la condición de militar, el empleo, la relación de servicios y la situación administrativa.

Por todo ello, se considera que, atendiendo al principio de minimización de datos, debería valorarse la sustitución del documento nacional de identidad por el número de la tarjeta de identidad militar.

Por otro lado, en relación con las solicitudes de información, el artículo 17.3 se limita a señalar que “Las solicitudes de información se realizarán por cualquier medio que permita la plena identificación de quien solicita, dejando constancia de la identificación del medio en el que desea que se practique la respuesta”. Atendiendo al citado principio de minimización, debería concretarse en la norma los datos personales que se entiende que permiten la “plena identificación” al objeto de evitar el tratamiento de datos personales excesivos, y que podría limitarse al nombre, apellidos y número de la tarjeta de identidad militar.